

Elecciones en Colombia II

www.360geopolitica.org

Con las elecciones legislativas a cuatro semanas y la primera vuelta de las elecciones presidenciales programada para el 31 de mayo, Colombia se acerca a un momento político decisivo. Estos comicios se desarrollan en medio del *deterioro* humanitario y de derechos humanos más grave en más de dos décadas y en un contexto de tensión institucional, reconfiguración geopolítica y fragmentación sin precedentes dentro del sistema político.

Tres dinámicas subyacentes están remodelando el panorama electoral colombiano y alterando el equilibrio de poder de cara a 2026.

Contexto

Colombia enfrenta su crisis humanitaria y de derechos humanos *más aguda* desde mediados de la década de 2000. Desde 2022, organismos oficiales e independientes reportan un fuerte aumento en masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos, particularmente en regiones rurales y periféricas. La violencia se ha expandido tanto en escala como en geografía, afectando territorios que habían experimentado una relativa estabilización tras el acuerdo de paz de 2016.

Este deterioro se debe principalmente a la expansión y consolidación de organizaciones armadas y criminales ilegales, que operan en el marco de la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro. Aunque concebida como una estrategia para desescalar el conflicto mediante el diálogo, la política ha coincidido con una reducción de la presión coercitiva del Estado en regiones clave, creando incentivos para que los grupos criminales amplíen su control territorial.

Las principales víctimas incluyen mujeres, niños, minorías étnicas, funcionarios judiciales, actores políticos de la oposición y periodistas. Las organizaciones de derechos humanos describen un patrón sostenido de victimización que combina violencia letal con intimidación política, acoso y estigmatización, debilitando la gobernanza local y erosionando los mecanismos de protección institucional.

Estas tendencias están ampliamente documentadas por la Defensoría del Pueblo, el sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Comisión de la Verdad, Human Rights Watch y organizaciones de investigación independientes, incluyendo 360° Geopolítica. A pesar de diferencias metodológicas, sus hallazgos convergen en una conclusión compartida: *la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y normas humanitarias ha disminuido drásticamente desde 2022.*

Desarrollos Críticos

1. Reconfiguración Geopolítica y Reversión de la Política de Seguridad

Tras meses de creciente tensión diplomática entre Bogotá y Washington, la postura exterior y de seguridad de Colombia ha experimentado un cambio notable. Esto sucede después de un periodo marcado por la retórica confrontativa del presidente

Gustavo Petro y el dictador venezolano Nicolás Maduro hacia el presidente estadounidense Donald Trump.

A principios de enero de 2026, las autoridades estadounidenses detuvieron a Maduro y lo presentaron ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, señalando una escalada decisiva en el enfoque de Washington hacia el régimen venezolano. En pocos días, el presidente Petro *solicitó* formalmente una reunión con Trump, la cual fue *aprobada*.

En la víspera de esa reunión, el gobierno colombiano autorizó su primer bombardeo en más de tres años contra una posición del ELN en Catatumbo. Esto marcó una clara ruptura con la anterior reticencia de Petro a autorizar operaciones militares ofensivas contra el ELN, a quienes llama *“sus hermanos”*. Al mismo tiempo, Colombia extraditó a Andrés Felipe Marun Silva (“Pipe Tuluá”) a Estados Unidos, a solicitud del Tribunal del Distrito Este de Texas, una de las acciones de cooperación judicial más relevantes de la presidencia de Petro.

Ya descertificado y en la lista Clinton, Petro logró concretar la reunión con Trump, un *beneficio mixto* obtenido solo mediante una negociación forzada, una humillante muestra de deferencia y la aceptación de todos los compromisos impuestos por Washington, incluida la entrega de criminales adicionales.

En el proceso, se distanció de Maduro, abandonó su postura anti-industria petrolera y debilitó a Iván Cepeda al admitir que la Paz Total había empoderado a grupos armados ilegales y al crimen organizado. Su objetivo principal ahora es dejar el cargo sin sanciones estadounidenses ni responsabilidades legales.

Simultáneamente, a pesar de haberse opuesto previamente a la exploración de combustibles fósiles en el país, la administración Petro ha aceptado la cooperación liderada por EE. UU. en el sector de gas y petróleo de Venezuela, subrayando una reversión más amplia en política energética y de seguridad. Este cambio refleja un giro oportunista: priorizar la alineación personal y la protección legal sobre la coherencia ideológica.

Internamente, las consecuencias han sido significativas. Grabaciones de audio asociadas con la extradición de Pipe Tuluá han alimentado acusaciones de financiación ilícita de campaña relacionadas con la elección presidencial de 2022 y han generado denuncias formales que involucran al hermano del presidente, Juan Fernando Petro².

2. Gobernanza, Integridad Electoral y Violencia Política

Una segunda dinámica que configura el entorno electoral se relaciona con la gobernanza y la integridad electoral. Los críticos sostienen que Petro ha recurrido cada vez más a decretos ejecutivos, mientras que el Pacto Histórico ha seguido estrategias electorales que ponen a prueba el marco regulatorio colombiano. Las acusaciones incluyen financiamiento opaco de campañas, inscripción irregular de candidatos y procedimientos internos de consulta controvertidos liderados por el senador y aspirante presidencial Iván Cepeda.

¹ La solicitud de Petro llegó en un momento crítico, justo cuando la administración de Estados Unidos parecía dispuesta a considerar una recompensa por su captura, reflejando su medida anterior contra Maduro.

² Petro es acusado por miembros de su familia y otros de haber asegurado la Presidencia con fondos vinculados a narcotraficantes y redes de contrabando. Se alega que la Fiscalía permitió que el rey del contrabando-alias Pitufo-

abandonara Colombia y se refugiara en Portugal, un país que casi de inmediato recibió contratos opacos por millones de dólares del gobierno de Petro, aparentemente destinados a persuadir a Portugal de no extraditarlo de regreso a Colombia.

Aunque el Pacto Histórico niega estas acusaciones, han provocado investigaciones en curso ante las autoridades electorales y la Corte Constitucional. Los opositores sostienen que prácticas similares se emplearon en 2022 para asegurar la mayoría en el Congreso y llevar a Petro a la presidencia, disputas legales que permanecen sin resolver dentro de una Fiscalía parcialmente reconfigurada por nombramientos realizados durante su administración.

Estas tensiones institucionales se desarrollan en medio de un aumento sostenido de la violencia política. Asesinatos e intentos de ataque contra opositores, funcionarios judiciales y autoridades electorales han generado alarma en grupos de la sociedad civil.

Los simpatizantes del gobierno caracterizan estos incidentes como parte de los desafíos de seguridad de larga data de Colombia; los críticos sostienen que forman parte de un patrón más amplio de intimidación destinado a debilitar la supervisión democrática, amplificado por narrativas mediáticas afines y segmentos de la academia.

Notablemente, las respuestas internacionales han sido limitadas. Organizaciones multilaterales, incluidas Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Organización de Estados Americanos, se han abstenido en gran medida de un compromiso público sostenido, confiando principalmente en reportes oficiales del gobierno y fuentes de la sociedad civil alineadas. *Esto ha restringido la supervisión internacional independiente en un momento de alta vulnerabilidad institucional.*

3. Influencia Extranjera y Condena Selectiva

Una tercera preocupación clave se centra en las afirmaciones de interferencia extranjera en las elecciones. Algunos académicos cercanos a la administración Petro y analistas estadounidenses alineados con los demócratas argumentan que la administración Trump ha sincronizado decisiones de política para influir en elecciones en el extranjero. Los críticos sostienen que estas afirmaciones desvían la atención de una influencia externa más profunda y sostenida en la región.

Los vínculos estratégicos de Venezuela con Irán, Rusia y China, contruidos bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro, están ampliamente documentados, y los críticos sostienen que Petro ha mantenido alineamientos geopolíticos similares desde 2022. Las autoridades estadounidenses han vinculado a funcionarios venezolanos con redes de narcotráfico y financiamiento terrorista, con investigaciones que revelan esquemas de pasaportes fraudulentos y apoyo a grupos como Hezbolá en la expansión por el hemisferio occidental.

Venezuela también ha sido acusada de brindar apoyo político y logístico a grupos armados colombianos como las FARC y el ELN, ambos designados como terroristas por gobiernos occidentales, y las fiscalías estadounidenses han procesado a exfuncionarios venezolanos por conspiraciones de narcotráfico relacionadas con estas redes. Testimonios en tribunales de EE. UU. han alegado además apoyo financiero de Venezuela a campañas políticas colombianas vinculadas al ascenso político de Petro hasta la presidencia.

A pesar de estas preocupaciones, ni Venezuela bajo Maduro y Delcy Rodríguez ni Colombia bajo Petro han condenado crisis globales significativas, incluyendo la invasión rusa a Ucrania, la represión de protestas en Teherán o las actividades de grupos como Hezbolá y Hamas, lo que genera dudas sobre sus posturas de política exterior.

Esta asimetría ha reforzado percepciones de indignación selectiva y alineación ideológica, planteando interrogantes sobre la consistencia de los compromisos democráticos entre sectores de la izquierda regional y sus aliados internacionales.

Elecciones Legislativas de Marzo y Consultas Interpartidarias El 8 de marzo, junto con las elecciones al Congreso, los votantes colombianos podrán participar en consultas interpartidarias presidenciales.

Se realizarán tres consultas:

La Gran Consulta por Colombia (centroderecha)

El Frente por la Vida (centroizquierda alineado con el gobierno)

La Consulta de Soluciones (izquierda alineada con el gobierno)

Desde su introducción en 2018, las consultas han jugado un papel decisivo en las elecciones presidenciales. Tanto Iván Duque (2018) como Gustavo Petro (2022) emergieron a través de este mecanismo, mientras que la candidatura de Rodolfo Hernández en 2022 demostró que evitar las consultas sigue siendo la excepción.

La Gran Consulta por Colombia

La mayor consulta interpartidaria en la historia de Colombia reúne a nueve candidatos del centro y la derecha³. Inicialmente concebida como una coalición tecnocrática para contrarrestar la polarización, su equilibrio ideológico cambió con la entrada de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático.

Valencia lidera actualmente las encuestas internas y se beneficia de una maquinaria partidaria disciplinada que compete simultáneamente en las elecciones legislativas, con el expresidente Álvaro Uribe en la lista del Senado. Analistas estiman que la consulta podría movilizar entre cinco y seis millones de votantes, colocando a su eventual nominado en una posición fuerte de cara a mayo.

El Frente por la Vida

Lanzada con el respaldo del presidente Petro, esta consulta busca consolidar fuerzas alineadas con el gobierno y reconectarlas con estructuras políticas tradicionales. Las divisiones internas se intensificaron después de que las autoridades electorales excluyeran a Iván Cepeda por su participación previa en otra consulta.

El concurso ahora se centra en el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y Roy Barreras. Las encuestas favorecen a Quintero, mientras Barreras depende de la maquinaria legislativa y alianzas tradicionales. El resultado determinará si la coalición de gobierno se consolida o se fragmenta aún más.

La Consulta de Soluciones

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López ha centrado sus ambiciones presidenciales en esta consulta. Aunque se presenta como una alternativa centrista, su trayectoria política

³ Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

sigue estrechamente vinculada a la coalición de Petro. Su único oponente carece de reconocimiento nacional y respaldo medible en encuestas.

Para López, la derrota representaría un revés político importante y subrayaría la volatilidad de la estrategia electoral del bloque gobernante.

Primera Vuelta Presidencial del 31 de mayo

La elección presidencial de 2026 se perfila como una de las más competitivas en la historia reciente. A principios de 2026, doce candidatos han confirmado formalmente su participación en la primera vuelta, mientras que dieciséis precandidatos compiten en las consultas de marzo.

Se espera que varias figuras prominentes eviten las consultas y se postulen directamente, generando una boleta saturada y fragmentada⁴. Al menos cinco candidatos están alineados o emergen del órbita política del presidente Petro⁵, reflejando tanto la amplitud como las divisiones internas de la coalición gobernante.

Por el contrario, los candidatos provenientes de la consulta de centroderecha y de movimientos independientes se posicionan como alternativas a la administración actual, atrayendo a

votantes que buscan estabilidad institucional y un claro quiebre con la era Petro.

Evaluación Estratégica

Colombia ingresa al ciclo electoral de 2026 en medio de un deterioro humanitario acelerado, creciente estrés institucional y un panorama político inusualmente fragmentado. La proliferación de candidaturas alineadas con el gobierno disminuye significativamente la probabilidad de una victoria en primera vuelta, mientras amplía simultáneamente las oportunidades para que actores opositores e independientes consoliden apoyo electoral.

Las consultas de marzo constituirán una prueba crítica de la organización partidaria, el alcance territorial y la capacidad de movilización de votantes.

Sus resultados no solo moldearán la dinámica electoral de la primera vuelta, sino también el equilibrio de poder de cara a una probable segunda vuelta, que pondrá a prueba la resiliencia democrática de Colombia en un momento de profunda incertidumbre nacional.

Bogotá, Colombia - 9 de febrero de 2026.

⁴ Abelardo de la Espriella; Iván Cepeda; Sergio Fajardo; Clara López; Maurice Armitage; Mauricio Lizcano; Sondra Macollins; Daniel Palacios; Carlos Felipe Córdoba; and Santiago Botero.

⁵ Claudia López, Clara López, Iván Cepeda, Mauricio Lizcano, and Roy Barreras.